

El Catatumbo¹

Informe preliminar sobre el estado
de la implementación del Acuerdo de Paz

FEBRERO DE 2019



Resumen

En la región del Catatumbo, la implementación del Acuerdo de Paz se recibió con una gran expectativa frente a las posibilidades de transformación territorial y atención a las demandas históricas de las comunidades y las autoridades locales. Actualmente, la principal preocupación se refiere a las garantías de seguridad. Los reacomodos territoriales de los grupos armados ilegales y el escenario de disputa entre el ELN y el EPL han obstaculizado el desarrollo de programas como PNIS y PDET, de los que, sin embargo, se obtuvieron avances relevantes. Frente a esto, persiste un escenario de incertidumbre de cara a la continuidad de la sustitución de cultivos y las posibilidades financieras y territoriales para implementar lo consignado en el Plan de Acción para la Transformación Territorial-PATR.

La región está viviendo una doble afectación: por un lado, la reconfiguración e intensificación del conflicto armado con un alto impacto humanitario; por otro, las dinámicas de migración irregular proveniente de Venezuela y la tensa situación fronteriza.

Estado de la implementación

a) La renovación territorial (PDET)

El PDET de la subregión del Catatumbo comprende los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Se formularon en el proceso 10 pactos comunitarios para la Transformación Regional, cuatro Pactos Étnicos, y ocho Pactos Municipales. Estos fueron recogidos en el PATR firmado el 28 de septiembre de 2018.

Contenido

Estado de la
implementación de los
Acuerdos

Posiciones de los actores
claves en el territorio

Principales dinámicas y
trayectorias de la
confrontación armada

Principales
preocupaciones

La implementación en
cifras

¹ La región del Catatumbo comprende los municipios de Tibú, Sardinata, Ábrego, Ocaña, La Playa, Hacarí, San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen.

Las comunidades y autoridades locales han resaltado el proceso participativo que tuvo lugar en el territorio, en el que hubo un rol importante de líderes comunales y se afianzaron vínculos comunitarios. Además, se destaca la realización de pequeñas obras de infraestructura comunitaria (PIC), lo que generó visibilidad del programa y expectativa sobre su implementación. El gobierno nacional ha manifestado su interés en impulsar este proceso, en conjunto con el plan “Catatumbo Sostenible” liderado por la Alta Consejería para el Posconflicto y la reactivación del Conpes Catatumbo (3739 de 2013). Se han venido adelantando reuniones entre comunidades, autoridades locales y la Alta Consejería para el Posconflicto para la identificación y priorización de acciones. Estos avances han contribuido a mantener las expectativas entre comunidades y autoridades locales frente al Acuerdo de Paz. Sin embargo, persiste la preocupación por la financiación y posibilidades de ejecución en el contexto actual de seguridad.

b) La reincorporación

Al ETCR Caño Indio llegaron 308 personas y a octubre de 2018 permanecían 85 (27.6%). Los excombatientes han seguido diferentes trayectorias, entre estas: retorno a sus lugares de origen, continuación de su proceso de reincorporación de manera individual, búsqueda de opciones laborales en zonas rurales y urbanas o permanencia en el proceso colectivo del ETCR.

Se han destacado avances en proyectos productivos de cacao y cría de especies menores, así como de organización de mujeres excombatientes para la capacitación técnica y formación para la prevención de violencias basadas en género.

Las mayores preocupaciones se centran en la continuidad de los proyectos productivos y las garantías de seguridad. Se conoce de amenazas sobre excombatientes y sus familias, así como homicidios (según datos de prensa de la FIP han ocurrido 5 homicidios a excombatientes en Norte de Santander durante 2017 y 2018). A esto se suma que el contexto de seguridad que se agudizó en el último año ha implicado un riesgo de reclutamiento de excombatientes.

c) La sustitución de cultivos ilícitos

El PNIS se ha implementado en dos municipios del Catatumbo: Tibú y Sardinata. El mayor avance se ha concentrado en Tibú, donde, sin embargo, hubo atrasos en los pagos a las familias, así como en el inicio de la asistencia técnica. En este municipio se encuentran vinculadas 2.698 familias de las cuales 500 están recibiendo asistencia técnica. En Sardinata hay 302 familias vinculadas. Comunidades y autoridades locales han manifestado su preocupación por la poca claridad sobre las líneas de comercio que tendrán los proyectos productivos, así como la delimitación del programa sólo a las familias que quedaron vinculadas en estos dos municipios.

El contexto de seguridad ha sido la principal afectación a la implementación del PNIS. Las comunidades han manifestado el riesgo de amenazas por parte de grupos armados ilegales. Otra preocupación está en la financiación para cumplir el proceso con las familias vinculadas. A esto se suma el temor sobre la erradicación forzada y las posibilidades de regreso de la fumigación con glifosato. Estos factores han alimentado la histórica desconfianza frente a la intervención del Estado. La percepción de algunos sectores es que el programa fracasó, lo que se ha manifestado a través de diferentes movilizaciones sociales que han exigido la continuación de la sustitución voluntaria y el cumplimiento del Acuerdo de Paz y de pactos históricos entre campesinos y gobierno nacional.

d) Garantías de Seguridad

El inicio y desarrollo de la implementación del Acuerdo de Paz en la región ha estado marcado por la intensificación de la disputa armada entre el ELN y el EPL, además del surgimiento y consolidación de la disidencia del Frente 33 de las FARC. A esto se ha sumado el aumento de cultivos de coca, el fortalecimiento de economías ilegales como el contrabando y la migración irregular proveniente de Venezuela.

Este contexto ha generado un importante impacto humanitario, principalmente por desplazamientos y confinamientos. Según datos de OCHA, durante 2018 se registraron 49 eventos de desplazamientos masivos lo que representa un aumento del 149% respecto al 2017 (año que registró 9 eventos). Así mismo, preocupa el aumento de homicidios, amenazas a las comunidades y en particular a líderes sociales. Se resalta también el aumento de accidentes por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin explotar (MUSE) en los municipios de Hacarí, Convención, San Calixto y Teorama. Ante el contexto de elecciones regionales de 2019, preocupa la profundización de violencias, así como la continuación del control territorial que ejercen ELN y EPL en el territorio.

2. La situación de las víctimas

Se han venido generando procesos de reparación individual y colectiva a víctimas del conflicto armado. Sin embargo, hay una preocupación por el aumento de víctimas en el reciente escenario de conflicto tras la salida de las FARC. En ese sentido, organizaciones sociales y autoridades locales han llamado la atención sobre cómo serán los procesos de atención, retorno y reparación a las víctimas de los recientes hechos de desplazamiento, confinamientos, reclutamiento forzado, amenazas, delitos sexuales, entre otras afectaciones.

Así mismo, hay una preocupación sobre la atención psicosocial y reconstrucción de tejidos comunitarios en este contexto de crisis humanitaria, sobre todo por las consecuencias del desplazamiento y las agresiones a líderes sociales. La situación de seguridad durante 2018 generó diferentes procesos de confluencia entre organizaciones sociales del territorio e institucionalidad local, quienes conformaron la *Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz en el Catatumbo*², advirtiendo sobre la alta victimización de la población en zona rural. Esta iniciativa tiene como objetivo visibilizar la crisis humanitaria de la región, así como articular acciones y buscar mecanismos de protección para las comunidades y procesos organizativos.

3. Posiciones de los actores claves en el territorio

Hay una percepción generalizada sobre las dificultades de implementación del Acuerdo de Paz en un contexto de profundización de violencias y de conflicto armado. En este sentido, para las comunidades

² Está Conformada por Representantes del Pueblo Barí, el Movimiento por la Constituyente Popular MCP, el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT y representantes de Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, con el apoyo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU y acompañamiento de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y la Asociación de Personeros del Catatumbo.

y autoridades locales el Acuerdo “no aterrizó” y difícilmente podrá implementarse si continúa la disputa armada y la tensa situación fronteriza.

Desde la perspectiva de las comunidades, la principal respuesta del Estado ha sido militar y siguen demandando una respuesta integral y articulada por parte del Estado, enfocada en la resolución de necesidades y conflictividades históricas asociadas a la tierra, los servicios básicos y la transformación territorial. Desde esta perspectiva, se considera que la militarización del territorio no ha traído cambios ni respuestas frente a la situación de seguridad, aunque se destacan iniciativas recientes como el plan “Catatumbo Sostenible”.

El contexto actual de la frontera con Venezuela y su atención diplomática y humanitaria es visto por algunos sectores de la región como un distractor sobre la situación de los municipios del Catatumbo. En este sentido, se percibe que la situación de frontera ha captado los esfuerzos de gobierno e incluso de cooperación internacional.

4. Principales dinámicas de la confrontación armada

Desde finales de 2017 y durante 2018 se intensificó un escenario de disputa por rutas del narcotráfico y control territorial entre el ELN y el EPL causando un importante impacto humanitario. El ELN inició un proceso de expansión con un marcado interés sobre los cultivos, producción y comercialización de cocaína, consolidándose en sus territorios históricos y expandiéndose hacia las antiguas zonas controladas por las FARC. En lo que va de 2019, las dinámicas de esta guerrilla continúan concentradas en el manejo del narcotráfico, el control territorial e intereses de expansión sobre zonas rurales. Si bien el escenario de disputa ha disminuido, esta guerrilla continúa con ataques a la población civil, extorsiones, amenazas, ataques a infraestructura petrolera, entre otras acciones. Desde la perspectiva de las comunidades y autoridades locales, la finalización de la Mesa de Diálogo no ha generado cambios en el accionar del ELN aunque podría preverse una intensificación de enfrentamientos con Fuerza Pública así como mayor control territorial, probablemente a través de paros armados.

El EPL por su lado, viene de un proceso de reconfiguración organizacional tras la muerte de alias “Megateo” en 2016, que causó un relevo generacional en sus liderazgos y un interés por expandirse hacia zonas del ELN y las FARC. Este grupo estaría en proceso de expansión hacia zona urbana y rural de Cúcuta, a través del control de trochas o pasos ilegales en la frontera. En zona rural del Catatumbo estaría replegándose hacia zonas rurales de Hacarí. Ha llamado la atención un reciente comunicado de este grupo ofreciendo un cese al fuego al ELN para detener las afectaciones humanitarias.

También se fue consolidando en el último año la disidencia del frente 33 de las FARC, cuyo interés principal está en retomar zonas antiguas y controlar narcotráfico. Su presencia estaría en algunas zonas de Tibú, El Tarra y Convención.

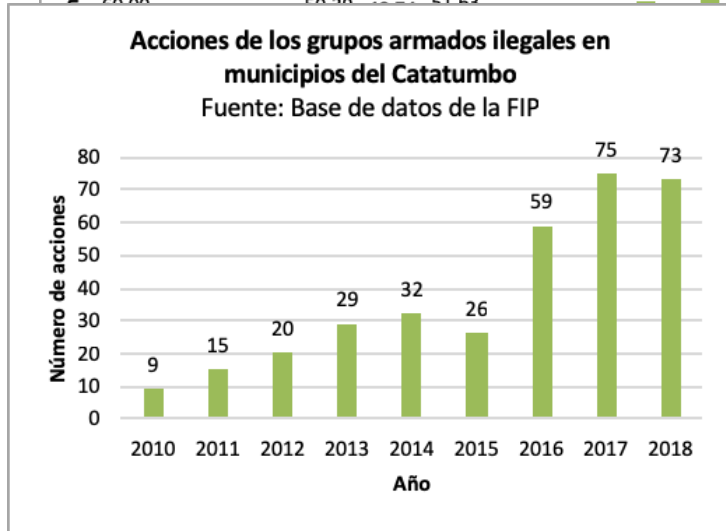
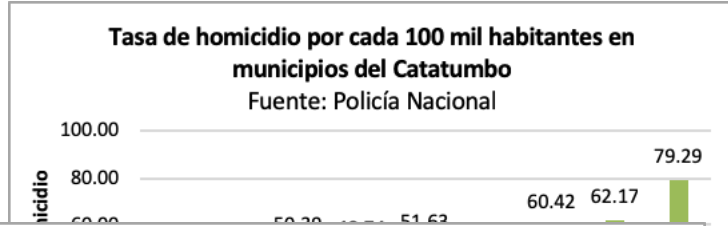
La Fuerza Pública, a través de la Fuerza de Tarea Vulcano, adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional ha realizado constantes operativos para debilitar los grupos armados ilegales en el Catatumbo y contrarrestar la disputa territorial entre ELN y EPL. En octubre de 2018, el gobierno de Iván Duque destinó 5.000 soldados a la región para combatir los grupos ilegales, lo que sumaría un total de 17.000 militares en la zona. Además, la Fuerza de Despliegue Rápido N° 3 realiza operaciones en los municipios de Hacarí, San Calixto y Teorama, y está conformada por cuatro batallones: tres de despliegue rápido y uno de acción directa y reconocimiento. Las acciones de la Fuerza Pública en la región han sido criticadas

por líderes sociales y comunidades pues insisten en que la militarización de la región lleva a la profundización del impacto humanitario y el temor entre los habitantes.

5. Preocupaciones sobre la implementación

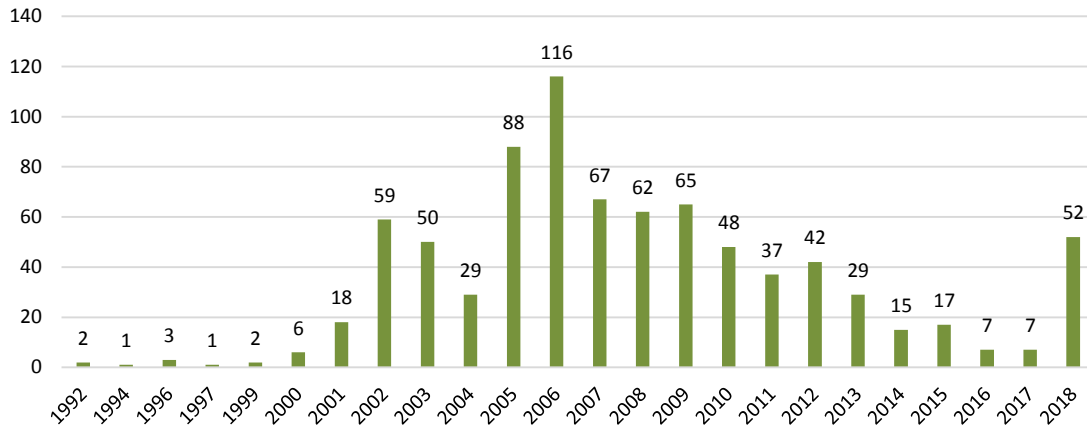
- a) El alto impacto humanitario es la principal preocupación en la región, en particular los eventos de desplazamiento forzado, confinamiento y accidentes por MAP y MUSE. La atención a estas situaciones ha presentado limitaciones debido a la continuación de la disputa entre los grupos armados ilegales.
- b) Se percibe poca claridad sobre las respuestas estatales para la continuación de la implementación del Acuerdo de Paz. No es claro para las comunidades si PDET, PNIS y los procesos de formalización de tierras continuarán su trabajo en territorio y si se articularán al Plan Nacional de Desarrollo.
- c) Con las dinámicas recientes de disputa armada, así como de migración irregular, existe preocupación por las afectaciones particulares sobre mujeres y niñas en zonas rurales del Catatumbo. Por un lado, las acciones del ELN y el EPL, así como la ofensiva de Fuerza Pública, pueden estar generando una profundización de violencias basadas en género, en particular violencia sexual y reclutamiento forzado de niñas. Por otro lado, la migración irregular de mujeres venezolanas que llegan a este contexto ha fortalecido dinámicas de explotación sexual.
- d) Persisten conflictividades en torno a la tierra, en particular entre comunidades campesinas y étnicas, las cuales han venido sosteniendo escenarios de interlocución tras sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, la situación humanitaria ha profundizado conflictividades y las comunidades indígenas han tenido afectaciones particulares.
- e) La situación de los excombatientes es frágil considerando los riesgos de reclutamiento por parte del ELN y el EPL, las bajas garantías de seguridad para su reincorporación política y económica, en particular, la poca claridad sobre el avance y proyección de proyectos productivos.
- f) La finalización de la Mesa de Diálogo con el ELN preocupa a diferentes sectores sociales considerando que esta guerrilla se ha venido consolidando en la región y una confrontación militar implica la profundización de acciones armadas, así como reacomodos de estructuras ilegales, lo que puede generar mayor impacto humanitario.
- g) La crisis fronteriza con Venezuela ha generado preocupaciones principalmente por la migración irregular que ha generado dinámicas que fortalecen las acciones de grupos armados y las economías ilegales: reclutamiento, homicidios, explotación sexual, tráfico de personas, servidumbre y vinculación en la cadena cocalera. Hay preocupación por las capacidades institucionales locales para la atención de la crisis humanitaria del Catatumbo y la migración venezolana.

6. La implementación en cifras



**Total de víctimas por accidentes de MAP y MUSE en municipios del Catatumbo
1992-2018**

Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal -DAICMA-



**Eventos de desplazamientos masivos forzados en municipios del
Catatumbo**

Fuente: Monitor de Eventos OCHA

